

## INFORMACIÓN SOBRE EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece diversas medidas de ayuda, previas a la ejecución hipotecaria, para evitar el desahucio a quienes padecen extraordinarias dificultades para atender al pago de la hipoteca constituida sobre su vivienda habitual.

Este modelo de protección se concreta en un Código de Buenas Prácticas, de incorporación voluntaria por parte de las Entidades bancarias, al cual BANCO MEDIOLANUM se ha adherido.

Este Código prevé unas fases de actuación sobre la deuda hipotecaria. La primera consiste en un **plan de reestructuración**. En el caso de que el plan de reestructuración no resulte viable prevé, como medida complementaria, que los deudores puedan solicitar una **quita** y por último, como medida sustitutiva de las dos anteriores, la **dación en pago** como medio liberatorio definitivo de la deuda.

El **ámbito de aplicación** de estos beneficios se limita a deudas hipotecarias ya vigentes en el momento de entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, es decir, a **préstamos y créditos vivos a 10 de marzo del 2012**.

A continuación se resumen los requisitos, trámites y contenido de la mencionada normativa:

### 1. Beneficiarios:

- Podrán acogerse a los beneficios previstos en el citado Real Decreto-ley las personas que se encuentren en el **umbral de exclusión**. Se considerarán situados en el umbral de exclusión las personas en las que concurren todas las circunstancias siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar<sup>1</sup> no supere el límite<sup>2</sup> de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas<sup>3</sup>, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad<sup>4</sup>.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 40% cuando

<sup>1</sup> A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

<sup>2</sup> El límite previsto será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

<sup>3</sup> Se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

<sup>4</sup> Se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad: Las familias numerosas, la unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo, la unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral y la unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias previstas en el segundo párrafo del apartado a).

**Requisitos adicionales** que deben cumplir los deudores para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas (**quita parcial y dación en pago**)

1. Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.
2. Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisición de la misma.
3. Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.
4. En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán los mismos requisitos anteriores.

## **2. Acreditación:**

El deudor deberá acreditar que se encuentra en el umbral de exclusión aportando los siguientes documentos:

### ➤ **Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:**

- 1) Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.
- 2) Últimas tres nóminas percibidas.
- 3) Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
- 4) Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
- 5) En caso de trabajador por cuenta propia, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

### ➤ **Número de personas que habitan la vivienda:**

- 1) Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
- 2) Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
- 3) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

### ➤ **Titularidad de los bienes:**

- 1) Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.
- 2) Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

- **Declaración responsable del deudor o deudores** relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situados en el umbral de exclusión según el modelo aprobado por la comisión constituida para el seguimiento del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.

### 3. **Ámbito objetivo:**

El Código de Buenas Prácticas se aplicará a las hipotecas constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos para la compraventa de **viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido de los siguientes valores:**

- a. Para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 250.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 50.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres;
- b. Para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 225.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 45.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres;
- c. Para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 187.500 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 37.500 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres;
- d. Para municipios de hasta 100.000 habitantes: 150.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 30.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres.

### 4. **Fases de actuación para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual:**

#### ➤ **Medida previa: Reestructuración de la deuda**

- En el plazo de un mes desde la presentación por el deudor de la solicitud de reestructuración junto con la documentación acreditativa conforme se encuentra en el umbral de exclusión, la entidad deberá notificarle y ofrecerle un plan de reestructuración en el que se concreten conjuntamente las siguientes medidas:
  - a. La carencia en la amortización de capital de cinco años. El capital correspondiente a las cuotas de ese periodo podrá o bien pasarse a una cuota final al término del préstamo o bien prorratearse en las cuotas restantes, o realizarse una combinación de ambos sistemas.
  - b. La ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a contar desde la concesión del préstamo.
  - c. La reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25% durante el plazo de carencia.

- Adicionalmente, las entidades podrán reunificar el conjunto de las deudas contraídas por el deudor.

#### ➤ **Medida complementaria: Quita**

- Los deudores para los que el plan de reestructuración resulte inviable podrán solicitar, como medida complementaria, una quita parcial en el capital pendiente de amortización, que la entidad tendrá facultad para aceptar o rechazar en el plazo de un mes a contar desde la acreditación de la inviabilidad del plan de reestructuración.
- A estos efectos, se entenderá por plan de reestructuración inviable aquel que establezca una cuota hipotecaria mensual superior al 50% de los ingresos que perciban conjuntamente todos los miembros de la unidad familiar.

- Esta medida también podrá ser solicitada por aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que ya se haya producido el anuncio de la subasta. Asimismo podrá serlo por aquellos deudores que, estando incluidos en el umbral de exclusión al que se refiere el Real Decreto-ley, no puedan optar a la dación en pago por presentar la vivienda cargada con cargas posteriores a la hipoteca.

➤ **Medida sustitutiva: Dación en pago**

- En el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuración, los deudores para los que la reestructuración y las medidas complementarias, no resulten viables podrán solicitar, como medida sustitutiva, la dación en pago de su vivienda habitual. En estos casos la entidad estará obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que ésta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.
- La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda.
- El deudor, si así lo solicitara en el momento de pedir la dación en pago, podrá permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3% del importe total de la deuda en el momento de la dación. Durante dicho plazo el impago de la renta devengará un interés de demora del 10%.
- Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la plusvalía generada por la enajenación de la vivienda en contraprestación por la colaboración que éste pueda prestar en dicha transmisión.
- Esta medida no será aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecución en los que ya se haya anunciado la subasta, o en los que la vivienda esté gravada con cargas posteriores.

**5. Medidas Fiscales:**

- Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios quedarán exentas del Impuesto sobre AJD.
- En la dación en pago de la vivienda:
  - a. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, es decir, que el sustituto (la entidad financiera) deberá hacerse cargo del Impuesto municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
  - b. Estará exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  - c. Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la cancelación del derecho real de hipoteca se bonificarán en un 50%.